El seguro de decesos ante el COVID-19

Ricardo Alonso Soto

Catedrático de Derecho Mercantil

Consejero Académico de Gómez Acebo & Pombo

1. La situación generada por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 ha generado una gran inquietud a los tomadores del seguro y a los asegurados de un seguro de decesos sobre su efectividad en estos momentos.

2. A este respecto y ante todo, hay que indicar que, según el comunicado oficial de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), entidad asociativa que representa los intereses de más de doscientas compañías de seguros que abarcan el 98% del negocio de seguros en España, la industria del seguro mantiene su servicio a los asegurados y las principales modalidades de seguro afectadas por el coronavirus (vida, asistencia sanitaria, asistencia en viaje y decesos) están funcionando con plena normalidad.

Por otra parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a las entidades que operan seguros de asistencia sanitaria y las compañías de seguros que operan en el ramo de vida han comunicado a UNESPA que las coberturas de los seguros de vida, salud y asistencia sanitaria están plenamente garantizadas en esta situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19, ya que han decidido, que, en aquellos casos en que las respectivas pólizas contengan una exclusión de los riesgos de epidemias y pandemias declaradas oficialmente, incluso si son calificadas por el Gobierno como «epidemia nacional», no se aplicarán dichas exclusiones del riesgo, de modo que no se repercutirá por esta causa ningún gasto al asegurado.

3. Por lo que respecta al seguro de decesos, que es aquel por el cual el asegurador se obliga a prestar los servicios funerarios pactados en la póliza si se produce el fallecimiento del asegurado (art. 106 bis Ley contrato de seguro), hay que señalar:

— Que, en esta modalidad de seguro, los riesgos normalmente cubiertos son la prestación de los servicios funerarios y las gestiones administrativas que conlleva un fallecimiento. Estos servicios

consisten principalmente en el ataúd, la conducción fúnebre, el traslado al tanatorio y al cementerio o incineradora, el acompañamiento de personas, los servicios religiosos, los servicios de enterramiento o incineración, los servicios complementarios (coronas, esquelas, tanatorio) y la gestión de los trámites y documentos que conlleva la muerte de una persona. También pueden asegurarse la asistencia en viaje y los traslados de los fallecidos, particularmente cuando se producen en un lugar o país distinto del de la residencia del fallecido.

— Que los riesgos excluidos son, con carácter general, la muerte en los supuestos de: a) conflicto armado, se haya producido o no una declaración de guerra; b) conflictos sociales que desemboquen en motines o tumultos populares; c) contaminación por radiactividad nuclear; y d) grandes catástrofes naturales como inundación, tempestad, huracán, terremoto y cualquier otro suceso que el Gobierno califique de calamidad o catástrofe natural. En las pólizas de seguro de decesos analizadas, a diferencia de lo que sucede en los seguros de vida y de salud, no se contemplan las situaciones de epidemia o pandemia como riesgos excluidos.

Dado que ninguno de los supuestos de riesgos excluidos citados se dan en las presentes circunstancias, hay que concluir que no existen razones para que los tomadores del seguro y los asegurados se preocupen por la prestación de los servicios funerarios por parte de las compañías aseguradoras en esta situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19.

4. Sin embargo, la crisis del COVID-19 puede plantear otras cuestiones con respecto al seguro de decesos:

4.1. En primer lugar, puede suceder que, como ocurre en estos momentos de crisis, el asegurador no haya podido proporcionar los servicios correspondientes a la prestación contratada. En este caso, si la suma asegurada determinada en el contrato excede el coste del servicio prestado, las pólizas establecen que el asegurador deberá devolver la diferencia a los herederos del asegurado fallecido.

Ahora bien, si el asegurador no ha podido prestar los servicios contratados por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o haberse realizado el servicio por otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, ésta tendrá la obligación de satisfacer la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido y no será responsable de la calidad de los servicios prestados (art. 106 bis número 2 de la Ley de contrato de seguro). Tal sería el caso de las empresas funerarias que, en estos momentos, están sobrepasadas y no dan abasto en la prestación de los servicios funerarios, tienen que aplicar la normativa extraordinaria para el manejo de cadáveres procedentes de casos de COVID-19 y están sujetas a la prohibición de velatorios y ceremonias de entierros con presencia de más de una persona.

Aunque la Ley de contrato de seguro nada dice al respecto, hay que interpretar que, si la prestación ha sido realizada parcialmente por causa de fuerza mayor (no ha habido velatorio, funeral y otros servicios complementarios), el asegurador deberá compensar a los herederos del asegurado fallecido devolviendo el importe de la suma asegurada correspondiente a los servicios no prestados.

4.2. En segundo lugar, si los organismos públicos o privados propietarios de los nichos o sepulturas no los tuvieran disponibles por cualquier causa que no sea imputable a la entidad aseguradora, ésta indemnizará a los herederos del asegurado fallecido con la parte de la suma asegurada

para esta prestación.

4.3. En tercer lugar, puede suceder que la suma asegurada, que viene determinada por el precio estimado de los servicios funerarios en la localidad de residencia del asegurado o por el precio concertado con los proveedores de la compañía de seguros en dicha localidad, no sea suficiente para cubrir el coste del servicio en el momento del fallecimiento del asegurado.

Ante el incremento de los costes de los servicios funerarios, la mayoría de las pólizas contienen cláusulas de revalorización automática del valor de los servicios funerarios con el consecuente ajuste de las primas. Si no se hubiera estipulado la revalorización, la compañía de seguros comunicará al asegurador el nuevo valor del servicio funerario contratado y el correspondiente incremento de la prima. Frente a esta situación el tomador del seguro tiene dos opciones: a) aceptar la revalorización con el incremento de la prima; b) rechazar la revalorización, en cuyo caso se mantendrá invariable el contrato, pero el tomador o sus herederos tendrán que optar por hacerse cargo del exceso de los costes sobre la suma primeramente asegurada o percibir la suma asegurada y encargarse de la gestión del servicio.

También hay que tener en cuenta que, si el asegurado fallece en un lugar distinto al de su residencia habitual, los servicios funerarios se efectuarán de acuerdo con las costumbres existentes en el lugar del fallecimiento y cubriendo un coste equivalente al contratado.

4.4. En cuarto lugar, si concurrieran varios contratos de seguros en la misma aseguradora, el asegurador estará obligado a devolver al tomador o a sus herederos las primas pagadas por el seguro que haya decidido anular (art. 106 bis número 3 Ley de contrato de seguro). Pero, en caso de fallecimiento, si concurrieran varios seguros de distintas aseguradoras, el asegurador que no hubiera podido cumplir con su obligación de prestar el servicio funerario en los términos y condiciones pactados, estará obligado al pago de la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido (art. 106 bis número 4 de la Ley de contrato de seguro).

4.5. En quinto lugar, podría plantearse la cuestión de que la citada crisis ha producido una alteración de las condiciones contractuales pactadas, porque la pandemia ha generado un agravamiento del riesgo puesto que se están produciendo más fallecimientos y de forma más temprana de lo que habían previsto las compañías aseguradoras. Las pólizas de seguros de decesos analizadas o no contemplan esta situación o reproducen los artículos 11 a 13 de la Ley de contrato de seguro relativos a la agravación del riesgo (aunque sin recoger la modificación introducida por la disposición final 1.2 de la Ley 20/2015). Sin embargo, hay que señalar, con respecto a esta cuestión, que el artículo 11 *in fine* (modificado) de la Ley de contrato de seguro, establece que, en los seguros de personas (entre los que se incluye el seguro de decesos) la variación de las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado no se considerará agravación del riesgo. Así pues, hay que interpretar que el carácter de pandemia de la crisis sanitaria del COVID-19 es una contingencia que afecta al estado de salud de todas las personas y, en consecuencia, no puede considerarse una agravación del riesgo a estos efectos.

4.6. Finalmente, hay que recordar que en los contratos de seguros de decesos:

- a) La entidad aseguradora garantizará al asegurado la libertad de elección del prestador del servicio, salvo en aquellos contratos en que se prevea un solo prestador (art. 106 *quater* de la Ley de contrato de seguro)

- b) Cuando los herederos del asegurado fallecido contraten los servicios funerarios con una empresa distinta de la ofrecida por la aseguradora, se aplicará lo dispuesto en el artículo 102 bis número 2 de la Ley de contrato de seguro anteriormente citado (art. 106 *quater* párrafo 2º de la Ley de contrato de seguro).

- c) La oposición a la prórroga del contrato solamente podrá ser ejercida por el tomador del seguro, nunca por el asegurador (art. 106 bis número 5 de la Ley de contrato de seguro).